

EL ECONOMISTA.mx

Iniciativa de contabilidad gusta a calificadoras

24 Septiembre, 2012 - 20:58

Credito:

Yolanda Morales / El Economista



Coinciden analistas de Fitch Ratings, Moody's Investor Service y Standard & Poor's (S&P) en que tal como está la iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) se otorgaría más certidumbre en el mercado sobre la gestión financiera de los tres niveles de gobierno.

Descartan que por sí sola la entrada en vigor de estos cambios pueda motivar una ola de ajustes de calificación, pues pasarán hasta dos años antes de que los gobiernos estatales y municipales puedan armonizar la contabilidad, difundirla en Internet y tener la capacidad para mostrar la información financiera actualizada.

En conversación, el director de Finanzas Públicas de Fitch Ratings, Humberto Panti, advirtió que la agencia considerará como negativo el no cumplimiento de las nuevas obligaciones.

"Será un aspecto negativo que en el mediano y largo plazo sí podría influir en la calificación de las entidades que no cumplan con la normativa", refirió. Fitch califica a 31 gobiernos estatales y al DF.

SOLVENTES SIN VOLUNTAD

Por su parte, el director de Análisis de Subsoberanos en Moody's, Alejandro Olivo, comentó que la iniciativa es muy positiva para mostrar una fotografía completa de la situación financiera de los gobiernos, que incluirá las deudas de corto plazo que han adquirido algunas ministraciones y que al no estar documentadas generan cierta incertidumbre.

“En términos de prácticas de administración un problema de algunos gobiernos ha sido la falta de pago de préstamos que tienen más que ver con falta de voluntad política, que de capacidad financiera”, agregó. Moody’s es la segunda mayor calificadora de gobiernos estatales y municipales en el país.

RETO, MUNICIPIOS POBRES

Mientras la directora de Análisis de Estados y Municipios en S&P, Daniela Brandazza, evidenció que una vez aprobados los ajustes, la preocupación se centraría en los municipios más pobres del país que no tendrían capacidad financiera para contratar especialistas que puedan armonizar las cuentas públicas.

Aun cuando la iniciativa contempla que este tipo de municipios serán apuntalados por el gobierno estatal para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa, faltan candados que garanticen la responsabilidad de la administración estatal, refirió.

La idea de crear una especie de Fobaproa estatal y municipal, como ha propuesto el PRD en el Senado, enviaría una mala señal al mercado, consideró el director del Área de Finanzas Públicas de Fitch Ratings, Humberto Panti.

“Un rescate directo del gobierno federal para las entidades daría una muy mala señal. Lo que debemos buscar es promover que los gobiernos locales, estatales y municipales sean más profesionales en el manejo de los recursos públicos y que tengan prácticas de prudencia financiera”, refirió.

De acuerdo con el analista, el papel del gobierno federal en materia de gestión de deuda de los gobiernos subnacionales tendría que limitarse, tal como se ha propuesto en la iniciativa, a promover reglas de transparencia en la información financiera, documentación de obligaciones y difusión periódica en línea.

ymorales@eleconomista.com.mx